

CAPÍTULO 2



LA REALIDAD DEL PACÍFICO COLOMBIANO

Al abordar los estudios sociales y antropológicos sobre la costa Pacífica Colombiana se hace énfasis en los territorios ancestralmente poblados por las comunidades negras e indígenas, los que han adaptado, apropiado y usado desde su historia cultural la riqueza natural de la región, cohesionándose con esto a la situación económica con otros municipios. Por lo que la ancestralidad y prácticas productivas tradicionales han reivindicado étnicamente las comunidades, en un contexto físico en el que:

El Pacífico colombiano está localizado al occidente del país, ocupando una superficie superior a los 116 mil km² sobre la franja occidental de Colombia. Consistente en una zona que abarca el territorio occidental de tres países, Panamá, Colombia y Ecuador, con una extensión aproximada de 175.000 km², en donde, según expertos, se concentra cerca del 10% de la biodiversidad del planeta, con importantes niveles de conservación biótica que aún se mantienen en diversas franjas de este territorio. La región está integrada por los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño (179 municipios), los cuales se caracterizan por tener entornos similares; es decir, vegetación selvática y cuencas hidrográficas sobre valles amplios e inundables y algunas veces pantanosos, donde sobresalen la Serranía de Baudó en el departamento de Chocó y la cordillera de los Andes en los departamentos de Cauca y Nariño". (Romero, 2009, p.7)

De esta manera, la región Pacífica Colombiana, tiene unas subregiones y elementos comunes por cuencas que permiten identificar características similares. en donde el territorio y los pueblos se piensan en articulación. Y, en el que los movimientos sociales comunitarios han asumido grandes retos en su defensa de la sostenibilidad ambiental, equidad de género, soberanía, seguridad

alimentaria, cultura, ancestralidad, biodiversidad y repiensen la adaptación al cambio climático, como la concreción del desarrollo hacia el futuro.

Además, en el Pacífico colombiano la biodiversidad del territorio integra a los grupos étnicos, comunidades negras, indígenas y mestizas al hábitat en medio de manglares, esteros y costas, bosques, humedales. Todo, dentro de un ecosistema natural calificado por la comunidad internacional y por movimientos sociales como uno de los principales territorios poseedores de riqueza en el país. En medio de los ríos, las cuencas y el mar gravita lo antropológico, social y biológico, encontrándole significado a las fuentes de recursos ecológicos y económicos que requieren lo ético y lo moral como un hecho político para el desarrollo de las capacidades.

En donde el océano Pacífico como trópico húmedo de temperaturas altas y precipitaciones frecuentes, con llanuras y pisos térmicos que se evidencian en ciénagas, bahías, ensenadas, acantilados y esteros. Junto a las interconexiones entre los municipios del Pacífico Colombiano, a partir de la existencia del océano y su riqueza fluvial a través de los ríos en los cuatro departamentos. Es un escenario que, por sus ventajas comparativas, genera un marco económico a partir del cual el país en su región andina se favorece del litoral Pacífico por su incidencia económica, positiva para esta otra región.

Así mismo, es crucial para el subsector portuario, en los aspectos logísticos de comercio exterior y los negocios internacionales hacia el océano Pacífico. Pero de manera contraria, es dispersa en términos de oportunidades y de favorecimientos competitivos y productivos para los pueblos del Pacífico, pues presenta una carencia de plataforma tecnológica fluvial que haga posible el uso de la modernidad en transportes de punta, como existen en otros países del mundo.

En síntesis, la cosmovisión de los pueblos afrocolombianos e indígenas, ha sido construida a partir de los fuertes vínculos relacionados con los ríos, el mar, transporte acuático, la ecorregión, su alimentación orientada con los cultivos de pan coger, pesca, frutos promisorios y actividades culturales relacionadas con el folclor, oralidad y música, prácticas de medicina tradicional como la maternidad (partería) y la curandería. A partir de los cuales la ancestralidad, los mitos y leyendas, ocupan un papel protagónico en el concepto de familia extensa, apropiación y adaptación del territorio, las que fundamentan el concepto de identidad étnica en los pueblos del pacífico colombiano.

SITUACIÓN DE BUENAVENTURA

La ciudad de Buenaventura es oficialmente un Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de acuerdo a la ley 1617 de 2013, lo que aumenta sus potencialidades en relación a la economía del país y, en lo internacional, en el intercambio comercial de importaciones y exportaciones, con especial interés en la conexión con el continentes asiático, debido a que:

La ubicación estratégica de Buenaventura y su sistema hídrico la han convertido en el principal puerto marítimo del país sobre el océano Pacífico, pues no solo es una ciudad próxima al canal de Panamá y a las costas de Ecuador, sino que además es equidistante a los puertos de Vancouver (Canadá) y Valparaíso (Chile) (Departamento Nacional de Planeación –DNP–, 2006, Documento CONPES 3410). De otra parte, el municipio se caracteriza por contar con abundantes ríos de la vertiente del océano Pacífico y sus afluentes, éstos representan el sistema arterial natural que nutre a la región en toda su extensión. Son de especial relevancia las cuencas hidrográficas del río San Juan, de la Bahía de Buenaventura, Bahía Málaga, de los ríos Calima, Dagua, Anchicayá, Raposo, Mayorquín, Cajambre, Yurumanguí y Naya [...]. (Centro Nacional de Memoria histórica, 2015, p. 31, 32)

Además, la ciudad de Buenaventura muestra una paradoja similar a la realidad vivida por otras regiones de Colombia; pues, mientras por un lado cuenta con una gran riqueza natural que se evidencia en su biodiversidad y sus comunidades multiétnicas⁵ con un enorme capital cultural; por el otro, la pobreza material y falta de oportunidades de desarrollo para construir unas condiciones de vida dignas agobian a la inmensa mayoría de sus habitantes, De ahí, algunas características negativas mencionadas en el documento del DANE,⁶ señalan que:

La violencia en Buenaventura ha afectado a toda la población y sus actividades económicas, incluyendo las que se desarrollan en Bajamar. En los últimos años, las extorsiones (cobro de peajes ilegales, al momento del tránsito mercantil, a los comerciantes y empresarios en general. Expropiación de bienes, muebles e inmuebles transferidos de manera ilegal) como otro mecanismo de

⁵ *Étnicamente la población de Buenaventura está compuesta así: El 73% de los habitantes eran afrocolombianos, el 26% mestizos, el 0,8% raizales y el 0,2% indígenas. (Centro Nacional de Memoria Histórica. 2015, P 35.)*

⁶ *La información del DANE en la toma de decisiones de los municipios del país (2020, P 34-37.)*

generación de ingresos y victimización masiva de la población en las zonas insular y continental de la ciudad. Centro Nacional de Memoria Histórica (2015, p 35). Y lo mencionado por el Consejo Noruego para Refugiados.⁷

Y porque, también, el origen de los cultivos de coca en esta región se remonta a las migraciones campesinas provocadas por el plan Colombia hacia 2002, junto a los departamentos de Caquetá y Putumayo. Así mismo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estimó que, en 2006, en el Valle del Cauca había 281 hectáreas de cultivos de coca y éstos alcanzaron su pico máximo en 2008 con 2.089 hectáreas. Desde entonces, las hectáreas cultivadas presentaron una tendencia decreciente hasta alcanzar 482 hectáreas en 2012.

De allí, que al existir un tipo de Estado que al no proveer y regular los bienes públicos facilita la dinámica del conflicto armado, al posibilitar el auge de intereses socioeconómicos y políticos no legítimos en contra de los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas e indígenas de esta región. Como respuesta a ello, se han presentado hechos sociales y políticos de protesta con amplio impacto internacional, nacional, regional y local. Ejemplo de ello fue la protesta cívica, manifestada por diferentes grupos sociales desde el 16 de mayo hasta junio 6 del 2017 en la ciudad de Buenaventura, cuando los ciudadanos se movilizaron pacíficamente a través de marchas y actividades de resistencia civil, en contra de las condiciones inhumanas de pobreza, exclusión e inequidad en la cual está sumergida la población por parte del Estado-Nación Colombiano, como un gesto de compromiso y conciencia social en la búsqueda del “Bien-Estar” de sus moradores.

Estas movilizaciones surgieron como mecanismo de reclamación y reivindicación al Estado, sobre las soluciones a problemáticas complejas que durante años no se han atendido y que requieren de medidas transversales para su atención. Entre las principales peticiones que motivaron las movilizaciones sociales se destacan: la inexistencia del servicio de agua potable constante y de saneamiento básico; así como la inclusión de una salud integral con eficiente infraestructura hospitalaria, educación de calidad, vivienda digna e infraestructura mobiliaria, protección del medio ambiente y riquezas naturales, oportunidades para la generación de empresas con énfasis en productividad propia (cabotaje,

⁷ *Porcentaje de víctimas según el hecho victimizante y de género (ACNUR. 2014, P 4.)*

pesca, madera, turismo, agricultura), empleo decente, atención a las víctimas del conflicto armado, espacios de esparcimiento recreacional, cultura, deporte, etc.

Además, porque las diferentes acciones colectivas que se han presentado en Buenaventura reflejan las inconformidades de la población civil frente, entre otras, a la escasez de oportunidades, la baja representación de líderes étnicos en política, la concentración del poder por parte de las oligarquías colombianas, la exclusión e inequidad social. Son el reflejo de la marginalidad y segregación hacia las comunidades negras e indígenas del país, consideradas como minoritarias, sin reconocerlos como son actores activos, constructores de sus identidades culturales y prácticas productivas con estrategias de adaptación y de convivencia integral con el territorio.

En suma, durante las dos últimas décadas la Defensoría del Pueblo y ACNUR (2014) documentaron a través de la investigación titulada “Problemática Humanitaria en la región Pacífica Colombiana”, que la crisis estructural determinada por las dinámicas sociales del conflicto armado, exclusión social y los procesos de deshumanización en la Costa Pacífica Vallecaucana, han marcado tensiones en la familia, las organizaciones institucionales, fundamentalmente en la educación y en el diseño del proyecto de vida de sus habitantes.

Así, a partir de la implantación de modelos económicos extractivos o enclave, el incremento del narcotráfico, la minería ilegal, el fenómeno de la corrupción en las esferas públicas y privadas, la degradación de los valores, crisis educativa (por corrupción en la, cobertura a escolares ficticios), crisis en la salud, incremento del trabajo indecente, daño emocional (trastornos y estrés post traumático), daños físicos (con diferentes discapacidades corporales producto de minas antipersonas y enfrentamientos entre bandas criminales), incremento de la violencia intrafamiliar, violaciones, desplazamiento forzado y despojos territoriales, y con auge migratorio, en tres momentos a saber, primero Estados Unidos, luego Europa y, en el presente, Chile.

Por otra parte, en los últimos veinte años se evidencia en el territorio las lógicas del debilitamiento en los procesos de gobernabilidad, razón por la cual, el potencial de capacidades locales ha sido desarrollada desde las miradas exógenas sin la verdadera participación activa de actores que convergen al desarrollo local. Razón por la cual se desconocen e irrespetan los derechos fundamentales e intereses hacia el desarrollo humano con procesos de dignificación de las comunidades que han vivido y hacen resistencia permaneciendo en el territorio.

De esta manera finalizó el siglo XX en esta región “*con el reconocimiento de libertades individuales y formas de construcción de identidades y territorios desde la concepción colectiva*” (Defensoría del Pueblo. 2014, p. 43). Y, a partir de ello, formalizando los consejos comunitarios de comunidades negras y fortalecimiento de los cabildos indígenas.

Además, porque se considera que, los mecanismos de inserción y control de los grupos armados ilegales en Buenaventura, entre el 2000 al 2004, están relacionados con la presión que ejercieron la guerrilla del bloque 30 y Manuel Cepeda de las FARC-EP contra los empresarios de élites tradicionales y narcotraficantes respaldados por los paramilitares. Por lo anterior, surgieron entre 2000 y 2005 nuevos movimientos y organizaciones sociales en defensa de la vida ante las diferentes formas de violencia:

En las huellas de la memoria de líderes y lideresas está marcada la magnitud del conflicto que llevó a la transformación de las organizaciones sociales debido a la crisis urbana, institucional y de las redes parentales, a raíz de la llegada de miles de personas y familias desplazadas del área rural. (Garcés. 2009. p. 378).

También, durante el periodo 2006 al 2017, iniciaron los procesos de re-territorialización y construcción de comunidades emocionales afectadas directamente por el fenómeno de la violencia, por lo que surgen nuevas organizaciones que promueven procesos de resistencia con jóvenes, mujeres e iglesias, con los que identifican algunas fundaciones, entre ellas: Rostros y Huellas del Sentir Humano, FUNDESCODES, Capilla de la memoria, Colectivo Madres por la Vida, Grupo de Mujeres Triana, Comité por la Defensa del Agua y de la Vida.

Las mismas que se fortalecen en los procesos de comunidades negras a través del Comité del Paro Cívico, quienes efectúan acciones ciudadanas por la defensa de los derechos humanos, al expresar una renovación frente a prácticas y discursos encaminados hacia la acción colectiva y la movilización social, con lo que posibilitan el surgimiento de nuevos lenguajes para llevar a cabo procesos de denuncia, reconstrucción de memoria, recuperación, defensa del territorio, acompañamiento emocional y político focalizados en los derechos del pueblo para la materialización de la construcción de su dignidad humana.

LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA DE BUENAVENTURA

A pesar de tener uno de los puertos marítimos más importantes del país, en la población de esta subregión se destacan los altos índices de pobreza, desempleo y acceso limitado a servicios públicos básicos. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Buenaventura, la tasa de desempleo de la ciudad fue 63,7%, afectando particularmente a los jóvenes entre 15 y 24 años, quienes representaron el 63% de la población desempleada. Mientras el 24,42% de las familias obtienen menos de un SMLV (salario mínimo legal vigente) por mes y el 43,92% entre uno y dos SMLV.

Es decir, el 68,34% de las familias bonaverenses obtienen menos de dos salarios mínimos, cifra que se vuelve todavía más crítica cuando se considera que el tamaño de las familias de este municipio es relativamente alto (las mujeres tienen en promedio 4 o 5 hijos). Sólo el 2,58% devengan más de ocho SMLV (Cámara de Comercio de Buenaventura. 2011. P. 61). Así, es evidente que la población es pobre y desigual.

Por otra parte, los enfrentamientos violentos que padece la ciudad es una problemática que agrava el panorama crítico de la condición educativa, productiva, social, económica y política de la población bonaverense. Por su lado, las comunidades afrocolombianas e indígenas son las más vulnerables y víctimas directas del conflicto armado, sea por las disputas por el control territorial entre el ELN, Bandas criminales (Disidentes de las FARC-EP, Autodefensas Gaitanistas, La Empresa, Clan Úsuga y Águilas Negras) como por el crimen organizado relacionado con el narcotráfico, lo que ha impactado negativamente en la población civil, ocasionando en el municipio alta criminalidad, homicidios y desplazamientos forzados.

Por eso, el Comité Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento Forzado (CIPRF) priorizó a Buenaventura como uno de los municipios de alto riesgo para la población infantil. En tanto, las amenazas y el reclutamiento forzado han desencadenado deserción escolar y desplazamientos interurbanos y rurales, de familias y comunidades enteras. Tal como ocurrió en el barrio San José en 2016 y en la comunidad indígena de Chagpien Tordó (149 Niños y Niñas desplazados), en febrero de 2017. Al tiempo que las lideresas de algunos barrios están expuestas a amenazas por ejercer su papel de liderazgo y promover los

derechos humanos en la comunidad. En el que se destaca el caso de una mujer afrocolombiana de la zona del Bajo Calima en Buenaventura.

En general, según la Defensoría del Pueblo (2017), las mujeres reciben amenazas por impedir que sus hijos sean reclutados forzosamente, por sus relaciones reales o presuntas con miembros de los grupos armados y por el incumplimiento de normas de comportamiento impuestas por éstos. Fue así como, entre los años 2016 y 2017, se reportó que las niñas y adolescentes, especialmente en las comunas 2, 5, 7, 11 y 12, fueron víctimas de explotación sexual para proteger a sus familias de miembros de los Grupos Armados.

De otra parte, Buenaventura en medio de su abundancia geográfica, étnica y cultural, es una ciudad que expresa grandes barreras para el desarrollo equitativo de su población. Algunos indicadores expresan la crisis humanitaria en la cual está sumergida su comunidad: la cobertura actual de los servicios públicos en general, en la cabecera municipal es del 40% y, específicamente el acueducto y alcantarillado, es del 10%. Servicios que no existen en la zona rural, lo que refleja una desprotección total. Más si se tiene en cuenta que el promedio nacional de cobertura del servicio de acueducto es del 82% y de alcantarillado del 50% (Procuraduría General de la Nación, 2008). Y, sumado a ello, las limitaciones y restricciones de movilidad, el acceso de bienes, servicios y confinamientos principalmente de comunidades étnicas debido a la presencia y al accionar del ELN, de desmovilizados y de otros grupos no identificados.

Una situación que viene afectando principalmente a las comunidades que habitan las cuencas del Bajo San Juan y Bajo Calima, repercutiendo en sus actividades productivas. Además, durante el primer semestre de 2017, cerca de 1.758 personas (366 familias) han sufrido restricciones y confinamientos. El caso más reciente es el de las comunidades de Cocalito y Joojin Jeb, área rural de Buenaventura. Igual, en la zona urbana, los habitantes de las comunas 12, 11 y 10, sufren el flagelo de las fronteras invisibles ocasionado por las disputas territoriales entre Bandas criminales.